



RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

La caída de Fujimori en los primeros meses del 2000, la nominación del gobierno provisional de Valentín Paniagua (2000-2001) y la elección de Alejandro Toledo para el período de 2001-2005, crearon las condiciones para una transición a la democracia que daría espacios a las fuerzas sociales peruanas que denodadamente lucharon contra la dictadura fujimorista de la década de 1990.

En ese contexto, las organizaciones sociales y sindicales habían restablecido con mayor amplitud sus relaciones internas e intergremiales, mientras que los actores sociales de las provincias se fortalecieron socialmente manteniendo el sello independiente y regional de sus organizaciones y demandas.

Los partidos políticos retomaron su presencia en el escenario político sin una revisión crítica de sus posiciones frente a los cambios ocurridos en el escenario económico y social, sin propuestas a las demandas sociales, operando políticamente con los métodos previos de relación con la sociedad, sin que los desafiara la indispensable necesidad de remontar sus propias crisis internas, su escasa legitimidad social y su reducida capacidad de convocatoria.

La transición a la democracia pasaba, sin duda, por la puesta en marcha de políticas que atendieran algunas de las demandas más sentidas de la población y por la recreación de los mecanismos para su acceso al ejercicio de sus derechos políticos y ciudadanos.

No se trataba solamente de restablecer la vieja institucionalidad política y estatal, sino de innovarlas, replanteando algunos de los problemas y prácticas que habían dado lugar a la crisis institucional del Estado y a la de los partidos políticos, iniciada a fines de la década de 1980 y agravada con la dictadura fujimorista de los años de 1990.

Desafíos actuales

Uno de los grandes desafíos actuales es cómo transitar de los procesos sociales en los que la población se compromete, veces de manera esporádica u otras de forma más duradera, en una lucha local y regional independiente de toda organización partidaria contra su exclusión y por reivindicaciones económicas y sociales, hacia un ejercicio de la política.



Los partidos

La casi totalidad de los partidos no mostraron

desacuerdos con las políti-

apertura del mercado y las

inversiones extranjeras lo

era todo, aunque ello no

significara remontar los altos niveles de pobreza y

implementadas,

desempleo.

macroeconómicas



ESTADO Y ORGANIZACIONES

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Ese proceso requería de referentes organizativos nuevos o renovados que se propusieran la inclusión de los nuevos actores regionales en la dinámica política y en el fortalecimiento del sistema político democrático.

A pesar de esa urgencia por sentar nuevas bases para la reconfiguración del sistema político, los partidos y el propio gobierno no tuvieron la capacidad para reformular sus propuestas, la lucha coyuntural y de facciones se impuso y la sociedad siguió el curso de sus protestas y movilizaciones.

Durante los tres primeros años de gobierno de Alejandro Toledo, los niveles de deterioro de las condiciones de vida y la polarización económica y social se han mantenido y la sociedad presentaba signos de cansancio por la ausencia de cambios sustanciales dada la continuidad del modelo neoliberal fujimorista y los efectos sociales de las políticas económicas impuestas.

Se aunaban a esos problemas la escasa atención gubernamental a los graves niveles de desempleo y pobreza, los desaciertos políticos en la solución de los conflictos sociales, la improvisación e inexperiencia política para llegar a consensos con las organizaciones sociales independientes de las regiones y con los partidos políticos, y un ejercicio del poder que otorgaba privilegios y concesiones especiales a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, además de las prebendas a familiares y allegados del mandatario y actos de corrupción de funcionarios del gobierno.

Tampoco los partidos políticos de mayor peso, especialmente el APRA y el Popular Cristiano, así como los de menor influencia Unidad Nacional, Solidaridad Nacional y los de la izquierda, abonaron para que se construyeran nuevas propuestas y estrategias políticas

Asumieron posiciones críticas en algunas coyunturas, pero no formularon y sociales que cimentaran la transición democrática. propuestas de políticas de Estado alternativas de corto y mediano plazo respecto a las políticas económicas aperturistas ni encaminadas a la solución de los problemas sociales

Marcha de los Cuatro Suyos, en el año 2000, encabezada por Alejandro Toledo entre otros, quien llegaría a ser presidente del Perú. Esta movilización marcó el despertar ciudadano contra la dictadura de los noventa. El motivo de esta marcha fue la acusación de fraude que

rondó la tercera elección de Fujimori como presidente del Perú, en una etapa marcada por la

corrupción, el desempleo y la devastación de la economía y los recursos nacionales.



RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

En el contexto de una confrontación partidaria que se repetía periódicamente y no de búsqueda de soluciones a los problemas señalados, al promediar el año 2003, y en una coyuntura política de caída estrepitosa de la legitimidad de Toledo, las fuerzas laborales de las provincias y de la capital se movilizaron con un dinamismo inusitado realizando huelgas y protestas sin que el Estado pudiera establecer instancias de mediación eficaces, sin que mostrara capacidad para prever el desborde de las demandas y establecer acuerdos y consensos.

Los acontecimientos afloraron creando una situación de alto riesgo para la continuidad política del proceso democrático, pero sobre todo, pusieron al descubierto los límites estructurales de una democracia en una sociedad altamente segmentada, mayoritariamente empobrecida, sujeta a la informalidad del empleo y a la pauperización de los salarios. El deterioro explosivo de las condiciones de vida y de trabajo, generó la masiva movilización de diversos sectores de la sociedad en demanda de solución de sus reivindicaciones laborales y resarcimiento de sus derechos sociales, sistemáticamente conculcados durante el férreo control ejercido en la década anterior sobre los trabajadores y sus organizaciones, pero ahora sujetos a la falta de voluntad política del gobierno de Toledo para encauzar su solución.

La huelga

La huelga nacional indefideclarada, primeros días de mayo del 2003, por el Sindicato de Trabajadores de Educación del Perú (SUTEP) en demanda de incrementos salariales y prestaciones, fue seguida por la de los transportistas de carga pesada interprovincial pasajeros debido al alto costo de los combustibles y la autorización de incremento de pasajes, aunándose el anuncio de una huelga de policías por el incremento de salarios, la renovación de sus equipos y sus prestaciones sociales.



Muchas de esas movilizaciones se realizaron en el contexto de la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río celebrada en el Cuzco, donde también las demandas regionales afloraron en las protestas y movilizaciones.



RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Paralelamente, la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial se declaró en huelga indefinida en el cumplimiento de sus demandas contenidas en el "Acta de Solución" firmada el año anterior. Igualmente, el 27 de mayo; cerca de 30 mil trabajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) iniciaron una huelga nacional indefinida exigiendo la nivelación general de sus remuneraciones, nombramiento del personal contratado, aprobación del nuevo escalafón institucional, respeto a la carrera pública administrativa, así como la reposición de los trabajadores despedidos durante el régimen fujimorista, sumándose a este movimiento los servidores de ocho hospitales nacionales y más de 3 mil centros asistenciales.

A su vez, cientos de productores agrícolas reunidos en la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), se declararon en paro nacional indefinido, bloquearon carreteras y se enfrentaron con violencia a la Policía en diferentes puntos del país. El presidente de la JNUDRP confirmó la participación de las 106 juntas a nivel nacional exigiendo la solución al pliego de reclamos de diez puntos, uno de ellos, la reducción del IGV de 18 al 3% para el arroz, azúcar y maíz amarillo.

Emergencia

La declaratoria de emergencia, que no se producía desde el periodo de violencia terrorista, abonó el terreno de inestabilidad en medio de un creciente descontento social que no sólo derivó en cambios en el gabinete, sino en la caída del respaldo a la gestión presidencial (15%),la recurrente discusión sobre los problemas del gobernabilidad y la necesidad de renuncia temporalmente con la firma de acuerdos de solución de las demandas con cada una de las organizaciones nacionales en un plazo determinado, aunque frente a los incumplimientos gubernamentales, esos movimientos se renovaron a lo largo de la gestión presidencial del mandatario.



Los estados de emergencia suelen provocar la pérdida de civiles y policías

El 27 de mayo, el presidente Alejandro Toledo decretó el Estado de emergencia nacional, el cual regiría por treinta días e implicaba el control militar de las ciudades y carreteras por las fuerzas armadas a efecto de garantizar el libre tránsito vehicular y la reapertura de escuelas y colegios cerrados por la huelga del magisterio.

Las medidas de fuerza se suspendieron. En esta coyuntura de graves desencuentros entre un gobierno asediado por los movimientos sociales, por los líderes de los partidos de oposición, por las demandas legítimas de pequeñas y grandes organizaciones y los escándalos políticos y delincuenciales sobreexpuestos en los diarios y en la televisión nacional, mostraban palmariamente la fragilidad política del Ejecutivo, de las instituciones del Estado y de sus instancias de representación en las provincias, así como la escasa capacidad de interlocución.





RELACIÓN ENTRE EL ESTADO Y LAS ORGANIZACIONES SOCIALES

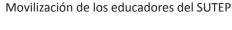
Las medidas de fuerza se suspendieron. En esta coyuntura de graves desencuentros entre un gobierno asediado por los movimientos sociales, por los líderes de los partidos de oposición, por las demandas legítimas de pequeñas y grandes organizaciones y los escándalos políticos y de delincuencia sobreexpuestos en los diarios y en la televisión nacional, mostraban palmariamente la fragilidad política del Ejecutivo, de las instituciones del Estado y de sus instancias de representación en las provincias, así como la escasa capacidad de interlocución.

La gobernabilidad se constituyó en un tema de debate, acrecentado por las pugnas e intereses políticos partidarios en los municipios y regiones donde se efectuarían elecciones o se restablecerían las representaciones regionales.

Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales, intelectuales y grupos de presión ejercieron un papel fundamental en la reflexión acerca de los desafíos que implica la gobernabilidad, la necesidad de renovación del sistema político que los propios partidos y el gobierno no contribuían a consolidar, la miopía de los partidos para lograr acuerdos y consensos básicos en la solución de los problemas sociales y respecto al futuro de la democracia en el país, la falta de propuestas políticas y sociales de carácter nacional que abonaran al desarrollo de la ciudadanía y a la definición de un proyecto de país en el mediano y largo plazo.

No se trataba solamente de remontar una historia política y social que había experimentado el país en la década pasada, el vacío era mayor dada la conducción partidaria (oficial y no oficial) que no contribuía a la consolidación de la institucionalidad democrática y a la reestructuración de mecanismos de confluencia y búsqueda de consensos.







Campesinos contra el tratado comercial con Estados Unidos (ALCA). Movilizaciones mientras se reunían Toledo (Perú) y Uribe (Colombia) para tratar el ALCA.